

# *Orígenes sociales de la democracia en España*

*Santos Juliá*

Como ha recordado Adam Przeworski, dos son las principales estrategias de investigación sobre las transformaciones de los regímenes políticos. La primera, macro-orientada, investiga las condiciones objetivas, sobre todo las económicas y sociales, y habla un lenguaje de determinación. La segunda, centrada en los actores políticos, hace recaer el acento sobre sus decisiones y sus comportamientos estratégicos<sup>1</sup>. Si aquélla intenta responder al porqué de la transición de un régimen autoritario a la democracia y busca explicaciones causales, ésta pretende contestar al cómo reconstruyendo el proceso político que desemboca en la democracia. Entre quienes han seguido la primera, es obligado referirse a Lipset y Moore, mientras Rustow y Linz ocupan lugar destacado entre quienes han seguido con más gusto el camino de los actores. Sin negar la pertinencia de un análisis de los actores en los procesos de transición, el mismo título de esta colaboración exige limitar las siguientes observaciones al análisis macrosocial.

Pero en el estudio comparado de fenómenos macrosociales se pueden distinguir también dos tradiciones<sup>2</sup>. La primera investiga la exis-

---

<sup>1</sup> PRZEWORSKI, ADAM, «Algunos problemas en el estudio de la transición hacia la democracia», en O'DONNELL, C.; SCHMITTER, Ph. C., Y WILTIGHEAD, L. (comps.), *Transiciones desde un gobierno autoritario. 3. Perspectivas comparadas*, Buenos Aires 1988, p. 79.

<sup>2</sup> RUESCHEMEYER, DIETRICH; STEPHENS, EVELYNE HUBER, y STEPHENS, JOHN D., *Capitalist development and democracy*, Carnhridge, 1992, pp. 12-15.

tencia de correlaciones cuantitativas entre distintos fenómenos con objeto de establecer vínculos causales entre ellos. Lipset, en un artículo de 1959, demostró que la riqueza, la industrialización, la urbanización y la educación están estrechamente interrelacionadas y asociadas a la presencia de una clase alta y baja más moderada y a una más amplia clase media, que traen consigo el correlato político de la democracia<sup>3</sup>.

A partir de Lipset, los estudios estadísticos de comparación entre naciones han identificado numerosas variables para explicar la democratización. Huntington enumera hasta diecisiete: elevado nivel de riqueza; distribución equitativa; modernización social; clase media fuerte; burguesía fuerte; alfabetización; educación, cultura industrial, protestantismo; pluralismo social... La diversidad y variedad de la lista introducen un alto grado de escepticismo respecto a la posibilidad de construir un modelo casual cerrado. Según Huntington, 1) no es suficiente un solo factor como condición de la democracia; 2) tampoco parece que sea necesario un solo factor; por el contrario 3) en cada país, la democracia es resultado de una combinación de causas que 4) cambia de un país a otro; y cambia también con el tiempo de modo que 5) la combinación responsable de una oleada de democratización difiere de las otras oleadas, e incluso es probable que 6) las causas del cambio inicial del régimen en una ola difieran del último cambio de régimen de aquella ola 4.

La propuesta de Huntington consiste en introducir las variables de tiempo y de lugar como constitutivas del propio modelo, de tal manera que el resto de variables actuará o no como determinante del proceso dependiendo del momento y del país de que se trate. Así, en la primera ola de democratización, del primer tercio del siglo XIX hasta los años treinta del XX, el desarrollo económico, la industrialización, la urbanización, el ascenso de la burguesía y de la clase media, el desarrollo de la clase obrera y su rápida organización, el crecimiento gradual de la economía y el protestantismo parecen haber desempeñado el papel principal, mientras que en la segunda ola primaron

<sup>3</sup> LIPSET, SEYMOUR MARTIN, «Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy», *American Political Science Review*, 23, 1959, pp. 81-114. Puede verse también *Political Man. The social bases of politics*, Nueva York, 1960.

<sup>4</sup> HUNTINGTON, SAMUEL P., *La tercera ola. La democratización a finales del siglo xx*, Barcelona, 1994, pp. 44-49.

los factores políticos y militares, con la imposición por los aliados de regímenes democráticos a los derrotados en la guerra y por los procesos de descolonización impuestos por Estados Unidos, y en la tercera habría que hablar de una mezcla de factores económicos y sociales con políticos y militares.

La estrategia de investigación que busca una correlación entre desarrollo económico y democracia plantea el problema de la relación entre democracia y capitalismo, núcleo de la segunda tradición de estudios macrosociales, el análisis histórico comparado que explica un determinado proceso o fenómeno social en su singularidad histórica y en sus regularidades causales. Y en este punto, la referencia a Barrington Moore es más que obligada. Partiendo, en la senda abierta ya por Hintze, de una concepción del feudalismo como un conjunto de instituciones que, al acentuar la inmunidad, el derecho a la resistencia y el contrato favorecían la emergencia de posibilidades democráticas, Moore postuló que el equilibrio entre la corona y la nobleza era la precondition para el futuro desarrollo de la democracia. Precondition que podría disolverse en el caso de que ese equilibrio se rompiera en favor de la nobleza, en ausencia de una clase de mercaderes urbanos. El triunfo de la nobleza sobre la corona, sin la presencia de la burguesía urbana, produce un resultado desfavorable para la democracia: «No bourgeois, no democracy», afirma Moore con una fórmula rotunda, que ha sido desde entonces como un axioma para explicar la ausencia de democracia en las sociedades en que no existía, o sólo muy débilmente, la burguesía<sup>5</sup>.

Supuesto el equilibrio entre corona y nobleza, es fundamental que la aristocracia promueva una agricultura comercializada, porque cuando el impulso comercial es débil persiste una enorme masa de campesinos que constituye un problema para la democracia por abrir la vía al comunismo o, si se combina con la industrialización, contribuir a la aparición del fascismo. Pero el fracaso de una aristocracia comercial deja todavía abierta la puerta a la democracia por la revolución que Moore llama burguesa argumentando la necesidad de diferenciar entre quienes apoyan la revolución, quienes la dirigen y

---

<sup>5</sup> MOORE, BARRINGTON TR., *Social origins of dictatorship and democracy*, Boston, 1967, pp. 413-432 para la «ruta democrática», p. 418 para la cita. Una buena exposición crítica de las tesis de MOORE es STEPHENS, JOHN D., «Democratic transition and breakdown in Western Europe, 1870-1939: a test of the Moore thesis», *American Journal of Sociology*, 94, 5, 1989, pp. 1019-1077.

quienes se aprovechan de sus resultados. En todo caso, lo decisivo es que para avanzar hacia la democracia debe romperse o transformarse la hegemonía de la clase terrateniente. Los terratenientes, escribe Moore, hacen la revolución burguesa o son destrozados por ella.

Las condiciones para un desarrollo democrático serían, pues, un equilibrio que evite la presencia de una corona fuerte o de una aristocracia terrateniente demasiado independiente; un giro hacia formas apropiadas de agricultura comercial; el debilitamiento de la aristocracia terrateniente; la prevención de una coalición aristocrática-burguesa contra los campesinos y los obreros y, en fin, una ruptura revolucionaria con el pasado. Cualquier otra ruta conduciría hacia el comunismo, cuando se da una burguesía débil, una fuerte élite agraria, un estado centralizado y un alto potencial revolucionario campesino; o hacia el fascismo si permanece una fuerte clase terrateniente, políticamente dominante, con una «labor-repressive agriculture» (orientada al mercado pero con un control político del trabajo) y la industrialización está suficientemente desarrollada para que la burguesía se haya convertido en un factor significativo, aunque en una situación políticamente dependiente por necesitar ayuda del Estado en forma de protección o de créditos; el estado cuenta con capacidad para reprimir la protesta campesina y obrera, mientras el potencial revolucionario campesino es bajo. Como es fácilmente perceptible, la tesis de Moore ha ejercido un fuerte influjo en la sociología y en la historiografía española al explicar las razones del autoritarismo y de la debilidad de la democracia en España <sup>6</sup>.

Desde su aparición, el libro de Moore se convirtió en centro de un debate que no ha cesado hasta el día de hoy. Por una parte, se achaca a Moore vincular positivamente la democratización al desarrollo del capitalismo: la democracia sería el resultado casi obligado, el efecto del capitalismo, más que su resultado negativo, o en todo caso el efecto de sus contradicciones internas. Además, continúa el argumento aunque ahora desde un enfoque de lucha de clases, la democratización se vincula también positivamente a la burguesía. Sin burguesía no hay revolución podría interpretarse como que la burguesía es la única o decisiva fuerza democratizadora. Moore olvida por com-

---

<sup>6</sup> Por ejemplo, FLAQUEH, LUIS; GINEH, SALVADORH, y MOHENO, LUIS, «La sociedad española en la encrucijada», en GINEH, S. (ed.), *España. I. Política y Sociedad*, Madrid, pp. 19-35.

pleto, según sus críticos, a las clases medias y, sobre todo, a la clase obrera como agente de la democratización. La discusión de su tesis -dentro de esta misma estrategia de análisis histórico comparado- procederá, pues, de quienes tomándosela en serio insisten en el carácter negativo de la vinculación entre capitalismo y democracia. El capitalismo competitivo no habría llevado a la instauración de la democracia burguesa como resultado de sus propias tendencias. Por el contrario, es la contradicción entre capital y trabajo lo que habría obligado al liberalismo a devenir democracia en un proceso cuya meta se situaba más allá de los límites deseados por la clase dominante.

Para elucidar la relación negativa entre democracia y capitalismo, Goran Therborn partía de tres hechos que parecían precisamente lo contrario: ante todo, la democracia no ha surgido en lugar alguno antes del capitalismo; además, algunos países capitalistas han experimentado un desarrollo puramente interno de la democracia; en fin, todos los estados capitalistas avanzados son hoy democracias. La cuestión radica en si estos hechos exigen una correspondencia estructural entre capitalismo y democracia o, más bien, si la democracia, que sólo aparece en el capitalismo, es resultado de una especial configuración de las luchas de clases de tal manera que donde no se produce esa configuración tampoco surge la democracia, aunque se trate de una sociedad capitalista.

La respuesta de Therborn a su propia pregunta es que no puede postularse una correspondencia estructural entre capitalismo y democracia. Es cierto que no hay democracia sin separación institucional entre reino de la política y sistema global de desigualdad en la sociedad (sin separación de estado y sociedad civil) y que tal separación sólo se da en el capitalismo. La democracia no es, por tanto, un accidente histórico: su origen es «la unidad/división entre estado-nación y mercado» que sustituye a la pirámide jerárquica feudal; el capitalismo es un modo impersonal de dominación que implica dominio del capital antes que dominio personal de la burguesía; el capitalismo tiende a crear una clase dominante internamente competitiva y pacíficamente desunida. A partir de ahí, sin embargo, la democratización parece determinada no por su propia estructura económica de la sociedad, sino por la diferente relación de poder entre las clases sociales del capitalismo. La burguesía comienza el proceso de democratización pero lo detiene cuando ha obtenido el compromiso institucional con la aristocracia terrateniente. Desde ese momen-

to, el papel protagonista pasa a otra clase o, más exactamente, a una coalición de clases, pues la clase obrera sola es incapaz de lograr la democracia por sus propios medios. La democracia burguesa aparece, por tanto, tras la lucha de masas; la democracia se establece en lucha contra la burguesía pero a través de los medios proporcionados por el estado capitalista: tal es la razón de que la democracia sólo aparezca en el capitalismo pero no como su resultado, sino como resultado de la lucha de clases <sup>7</sup>.

La discusión y el desarrollo de esta tesis constituye uno de los principales objetivos de *Capitalist development and democracy*, de Rueschemeyer, Stephens y Stephens, antes citado. La burguesía no lucha por la democracia una vez que asegura su plaza en el nuevo orden alumbrado tras el derrumbe del antiguo régimen; son las clases subordinadas las que combaten de hecho por la democracia. Sólo cuando no se identifica estado liberal y democracia es cuando se puede atribuir a la burguesía un papel protagonista, <sup>10</sup> que no quiere decir en modo alguno que capitalismo y democracia sean fenómenos sin relación alguna, sino más bien que el desarrollo capitalista está asociado a la democracia por dos efectos estructurales: refuerza a la clase obrera, a la par que debilita a la terrateniente. En las huellas de Therborn, y frente a Moore, estos autores reivindican el decisivo papel de la clase obrera en los procesos de democratización <sup>3</sup>.

La cuestión consiste entonces en realizar un análisis de clase que distinga el nivel de la estructura de clase basada en la organización de la producción, el nivel de las ideas y actitudes, y en fin, el nivel de la acción organizada con vistas a determinar y alcanzar los fines colectivos. En esta interpretación de la lucha de clases como ruta a la democracia, los intereses de clase nunca son obvios, inmediatos, sino socialmente contruidos, <sup>10</sup> que quiere decir que tanto como la clase, interesa el proceso de su organización, pues son los núcleos organizativos de las clases los que construyen socialmente los intereses y los que se dotan de recursos y establecen las estrategias para su conse-

<sup>7</sup> TIEHBOHN, GOHAN, «Dominación del capital y aparición de la democracia», *En Teoría*, 1, 1979, pp. 44-55.

<sup>8</sup> Para el papel de la clase obrera en los procesos de transición, VALENZIJELA, J. SAMIJEL, «Labor movements in transitions to democracy», *Comparative Politics*, 21, 4, julio 1989, p. 445, cuando afirma que «prácticamente todos los procesos de democratización incluyen un fuerte aumento en la activación del movimiento obrero a través de huelgas y manifestaciones».

cución. Toda acción colectiva crea un núcleo organizativo cuyos miembros tienden a adquirir independencia respecto de la base social que representan. La autonomía de los líderes les obliga a entrar en relaciones de competencia o colaboración con otros centros de poder, lo que puede alejarlos de otras organizaciones que asumen la defensa de intereses de la misma clase y obligarles, en el curso de la acción, a redefinir los propios intereses. De ahí que a partir de una misma clase surjan organizaciones con intereses enfrentados que, sin embargo, dicen ser depositarias de los intereses objetivos de la clase: la lucha entre sindicatos, la hostilidad entre partidos de la clase obrera o de la burguesía, elemento fundamental del proceso hacia la democracia, no tendría explicación si los intereses de clase fueran transparentes o si la clase, y no la organización de clase, fuera el sujeto de la acción al que se pueden atribuir determinadas estrategias.

Cuando el análisis de clase evita el lenguaje antropomórfico y la presentación de las clases como sujetos conscientes de sí y de sus intereses que actúan con atributos personales y propone en su lugar el estudio de la acción organizada desemboca necesariamente en el análisis del proceso y de los actores. Sin duda, nunca ha existido entre el análisis estructural o macro-social y el análisis de los actores una frontera clara, definida. Ningún «decisionista» es tan insensible a los contextos en que los actores toman sus decisiones que olvide el carácter constrictivo de una situación dada, los límites objetivos de la acción. Por su parte, ningún estudio macro-orientado puede rechazar de plano el decisivo papel que juegan las élites políticas y sociales en el proceso de instauración de la democracia.

Una primera relación entre ambas estrategias podría formularse diciendo que los factores objetivos limitan lo que es posible lograr en una situación histórica, pero no determinan el desenlace. Como ha señalado Przeworski, las condiciones objetivas delimitan las posibilidades pero no permiten formular predicciones, de modo que el modelo que presenta el cambio político determinado por las condiciones es deficiente desde el punto de vista metodológico e impotente desde el político. Pero, por otra parte, la relación entre condiciones objetivas y actores no puede reducirse a un límite. Debe percibirse de forma más dinámica: los actores crean también las condiciones en las que se desarrolla su acción. Rustow lo vio con claridad cuando exigió al científico político dedicado al estudio de las transiciones un conocimiento más profundo de la historia y propuso sustituir el análisis fun-

cional por otro genérico, esto es, por el estudio del proceso de democratización en el que distinguía, aparte de una sola condición previa -la unidad nacional- una fase preparatoria, definida por una lucha política prolongada e incierta en la que «los protagonistas deben representar poderosas fuerzas sociales (típicamente clases sociales)), y una fase de decisión, en la que es fundamental el liderazgo. El desplazamiento del poder de la oligarquía a la democracia, explica Rustow, es tan fundamental que difícilmente podría escapar a los ojos de los políticos, especialistas en cuestiones de poder. Esa transición sería, entonces, un acto explícito, deliberado, de consenso entre dirigentes <sup>9</sup>.

De estas estrategias de investigación se deduce, pues, una estrecha vinculación histórica entre capitalismo, liberalismo y democracia. Pero esa vinculación no depende siempre de la fortaleza de la burguesía, ya que la burguesía no siempre se ha mostrado históricamente como amiga de libertad. En la historia de la democratización, averiguar <sup>10</sup> que ha ocurrido con la clase obrera y con las clases medias es tan fundamental como seguir los avatares de la clase burguesa. La democracia ha sido, sobre todo en los países de Europa occidental, obra de la clase obrera que al incorporarse al sistema político extendió, con su empuje final, el voto e institucionalizó los derechos civiles. Por el contrario, la persistencia de un discurso obrero revolucionario y la fuerza de organizaciones obreras que siguen estrategias de revolución puede debilitar la consolidación de la democracia.

Estas reflexiones parecen especialmente pertinentes para el caso español. En 1931, la democracia fue instaurada por una coalición republicano-socialista que representaba intereses obreros y de las clases medias urbanas crecidas desde principios de siglo y que hablaban en lenguaje de revolución. En 1976 será de nuevo la presión de las clases medias y la clase obrera la que empuje hacia adelante el proceso de democratización impulsado por las élites políticas procedentes del propio régimen franquista y de la oposición. Sin duda, la amplitud y diversificación de las clases medias surgidas en los años sesenta y la distinta configuración de la clase obrera, pero también sus discursos y sus estrategias, explica en buena medida el diferente destino de la democracia en las transiciones de 1931 y 1976 en España.

---

<sup>9</sup> RUSTOW, DANKWART A., «Transitions to democracy», *Comparative Politics*, 2, abril 1970, pp. 337-363.



## *Orígenes sociales de la democracia en España*

Se puede partir, para la comprensión del proceso, de los años sesenta, ese período crucial de nuestra reciente historia. Pero no porque en ellos se produzca, desde una especie de vacío anterior, la gran transformación de la sociedad, sino porque en esa década se reanuda un proceso de cambio social, iniciado en torno a 1910 e interrumpido por la guerra civil., mientras perduraba un aparato de poder político que había pretendido congelar la historia en un glorioso pasado. La dictadura militar, eclesiástica y fascista implantada en 1939 se presentó como negación del liberalismo del siglo XIX y de la democracia republicana del XX; como intento de detener la historia y devolverla al mítico origen de la nación española, los Reyes Católicos, el Imperio, el Siglo de Oro. Veinte años después y frente a una estructura de poder congelada, como hibernada, una sociedad comenzó a ponerse de nuevo en movimiento, físico, ante todo, pero inevitablemente también moral, cultural. La contradicción llenó de frustraciones e incertidumbres pero también de expectativas y luchas la España de los años sesenta.

Una historia interrumpida que reanuda su marcha: quizá no haya mejores imágenes de ese nuevo comienzo que las de los jornaleros y campesinos pobres tomando el tren para emigrar a las ciudades o al extranjero y, en las ciudades, esos inmensos barrios, de chabolas primero, de casas baratas después, que surgen de la noche a la mañana en sus extrarradios. La primera capta el fin de la agricultura tradicional y, con ella, la desaparición de una de las grandes hipotecas que habían gravitado sobre el crecimiento económico y la modernización social: cerca de dos millones de activos agrarios se perdieron en sólo la década de 1961 a 1970. La segunda refleja el crecimiento de las ciudades, la gigantesca redistribución de la población sobre el territorio peninsular. Madrid recibió en sólo diez años 686.544 inmigrantes, 35.000 más que Barcelona, mientras Extremadura, las dos Castillas y algunas provincias andaluzas sufrían una notable sangría. Núcleos urbanos de más de 10.000 habitantes, que en conjunto pasaron de 17,3 a 22,5 millones en sólo diez años, primeros balbuceos de 10 que se llamó sociedad de consumo, el cambio de la moto de los años cincuenta por el utilitario de los sesenta y la irrupción, al volante, de una nueva clase media que protagonizó un cambio en la moral y las costumbres.

Este proceso de cambio de la sociedad, aunque impresionante en su magnitud y profundidad, no lo era tanto en su misma existencia:

el jornalero emigrando del campo para asentarse en los márgenes de las ciudades y el crecimiento de nuevas clases medias profesionales y técnicas accediendo a formas de vida no tradicionales no eran fenómenos inéditos en España, como los sociólogos del tardofranquismo, convencidos de su papel de adalides de la modernización social, han tendido a suponer. Los cambios en la agricultura tradicional y la aparición de una clase media ligada a la empresa capitalista se habían puesto ya en marcha en los años diez y veinte, con un significativo descenso de la población activa agraria mientras las mayores ciudades doblaban su población por el efecto de inmigraciones masivas: entre 1910 y 1930 cerca de millón y medio de españoles emigraron hacia las ciudades y otros dos millones marchaban al extranjero <sup>10</sup>. Lo que define a la España de los años sesenta no es el comienzo del proceso de urbanización e industrialización, sino la reanudación de una historia paralizada por una voluntad política victoriosa al término de una guerra civil de tres años.

Hay, sin embargo, algunas notables diferencias entre esos dos períodos de cambio económico y social que permiten definir, por contraste, <sup>10</sup> característico de los años sesenta. Ante todo, la magnitud y duración del crecimiento industrial fueron exactamente el doble en estos años que en los veinte y vinieron precedidos de un despegue muy vivo durante la década de 1950 frente a uno más moderado en la de 1910. Si entre 1913 y 1922 la tasa anual de crecimiento del producto industrial fue del 0,93 por 100 para subir luego a un 5,52 durante toda la dictadura de Primo de Rivera, entre 1950 y 1960 llegó al 7,2:3 por 100 y se disparó al 11,13 por 100 desde ese año hasta la aparición de la crisis en 1974. Los años 1960-1970 son los «verdaderamente brillantes» de la industrialización española, con una tasa de crecimiento por encima del doble de la europea, también muy alta, punteado de unas recesiones en las que el PIB creció sólo un 4 por 100, tasa que hoy juzgaríamos de fuerte expansión <sup>11</sup>.

Un crecimiento industrial tan rápido y sostenido durante veinticinco años no podía producirse sin acarrear cambios notables y permanentes en la propia estructura industrial y en su distribución terri-

---

<sup>10</sup> CAMAHEHO, JUIIS ALFONSO, *Del éxodo rural y del éxodo urbano*, Madrid, 1993, pp. 189-190.

<sup>11</sup> CARRERAS, ALBERT, «La industria: atraso y modernización», en NADAL, T.; CARRERAS, A., y SIJDHIA, C. (comps.), *La economía española en el siglo xx*, Barcelona, 1987, pp. 286-289.

torial: si hasta 1960, España tenía algunos islotes de centros fabriles dedicados a industrias tradicionales, a partir de esa fecha puede definirse como una nación industrial con producciones muy diversificadas. Con la apertura al exterior, la integración progresiva en los mercados internacionales, los flujos de capital, el turismo y las transferencias de divisas enviadas por la masa de emigrantes desde sus ciudades europeas, los años sesenta presenciaron la pérdida de peso relativo de la minería y de la producción de bienes de consumo como sectores líderes mientras las industrias productoras de bienes intermedios y de bienes de inversión pasaron a ser las dominantes. Siderurgia, metalurgia, cemento, química, fabricación de automóviles, construcción naval y fabricación de electrodomésticos y aparatos electrónicos se situaron a la cabeza de la industria que, por otra parte, rompió los límites geográficos tradicionales impuestos por la supremacía de la fabricación textil y de la industria alimenticia. Nuevos centros industriales, muy dinámicos, surgieron en ciudades como Zaragoza, Valladolid, Valencia o Sevilla: por vez primera, la industrialización se extendió por toda la geografía española de manera mucho más homogénea que en el pasado.

Este crecimiento no habría sido posible sin reconocer el fracaso de la política autárquica y sin abrir la economía española a los mercados internacionales. Con la liberalización económica, el flujo de capitales y mercancías se acompañó de una extraordinaria movilidad personal: millones de turistas invadieron España a la vez que millones de emigrantes salían a trabajar en las naciones europeas y miles de estudiantes solicitaban becas para proseguir sus estudios en universidades extranjeras, especialmente en Estados Unidos. De nuevo, no era ésta la primera vez que los españoles salían fuera de su país a trabajar y a aprender. También desde principios de siglo, la Junta para Ampliación de Estudios había becado a cientos de jóvenes universitarios para estancias de diversa duración en universidades de Alemania, Francia o el Reino Unido. De ellos se alimentaría el brillante momento de creación científica, artística y cultural que vivió España en el primer tercio de siglo. Pero una vez más, la magnitud y la duración del fenómeno son incomparables: si aquella generación constituyó una élite cultural empeñada en modernizar España proponiendo como modelo Europa, la nueva se encontró participando sin más de la cultura y las instituciones europeas. Para los españoles que salieron de su país a trabajar o a aprender en los años sesenta,

el futuro de España tenía que ser como el presente de Europa. Y ahora eso no lo creía una élite de varios cientos de intelectuales, sino miles de estudiantes y varios millones de trabajadores.

Las diferencias no afectaron, pues, únicamente al proceso material de industrialización, sino a la composición, al discurso y a la práctica de las clases obrera y profesional. En los años diez y veinte, el crecimiento económico y el cambio social se produjeron gracias al fomento de las obras públicas y de la construcción y en un marco de movilización obrera y de radical rechazo del sistema político por las clases medias, agudizados ambos en 1930 con la crisis de régimen político provocada por la caída de Primo de Rivera y por los efectos de la crisis económica mundial. Al final del período, los dirigentes obreros proclamaban la necesidad de una revolución política que abriera las puertas de una más lejana revolución social, mientras los más conspicuos representantes de la clase media diagnosticaban que era preciso destruir la monarquía para construir otro Estado a partir de fundamentos nuevos. La pesimista visión de la historia de España como un desastre, la identificación de la corona con una oligarquía cortada de la sociedad y la falta de incorporación de las nuevas clases media y obrera al sistema político provocaron en estas clases un sentimiento generalizado de alienación respecto del sistema político y del mismo Estado que llevó incluso a sus líderes intelectuales -por otro lado, nada revolucionarios como Ortega- a propugnar la necesidad de destruirlo para levantar, de sus cenizas, un Estado diferente <sup>12</sup>.

Se produjo entonces una confluencia entre amplios sectores de la clase media funcionarial y profesional y las organizaciones obreras que desembocó en la coalición republicano-socialista y en la revitalización de un discurso de revolución popular contra la monarquía, cuyos contenido y estructura pueden remontarse a la revolución de septiembre de 1868. Revolución era la palabra que en 1930 expresaba la percepción que de sí mismas tenían la clase media profesional y la clase obrera en su relación con la monarquía: si Isabel II había llegado a ser «esa señora imposible» incluso para personajes de su propio círculo, Alfonso XIII era el señor al que antiguos ministros

---

<sup>12</sup> «¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Heconstruido!», escribía ORTEGA en *El Sol* el 15 de noviembre de 1930, pero su convicción de que el Estado era poco más que el comité de defensa mutua de la oligarquía era común a los miembros de su generación.

prometían solemnemente no volver a servir. La República no fue resultado orgánico de una expansiva cultura democrática que hubiera impregnado lenta y progresivamente a las nuevas clases obreras y medias crecidas en las dos décadas anteriores. La República fue sentida y vivida como una revolución, como negación de todo lo anterior, como nuevo punto de partida, como afirmación revolucionaria del pueblo --obreros y clase media- contra el rey, no como culminación de un proceso de transición a un régimen democrático basado en un generalizado consenso social.

El proyecto de las clases medias republicanas consistía en fundar el nuevo régimen sobre una revolución política que inmediatamente renunciaría a serlo para convertirse en democracia. La democracia, por así decir, vendría después de la revolución, sería su resultado, su fruto. La cuestión fue que, por una suma de conflictos históricos (luchas entre obreros y patronos, entre catolicismo y laicismo, entre militarismo y sociedad civil, entre centralismo y autonomía) con los derivados de la propia coyuntura sociopolítica de los años treinta (crisis económica, fragmentación de la coalición republicano-obrera, luchas entre socialistas y anarquistas, resistencias de la reacción, escisión de la clase media), la República no contempló el asentamiento de la primera democracia española, sino, por el contrario, la persistencia de una expectativa de revolución frente a diversos proyectos de reacción. La revolución popular de 1931 no llegó a consolidarse como democracia política ni los valores propios de una cultura política democrática llegaron a impregnar a una mayoría social. La clase obrera interrumpió su proceso de incorporación a las instituciones políticas mientras que el sector de la clase media se alienó de la República y propugnó la necesidad de una segunda revolución. Un nuevo lenguaje de revolución que se adjetivaba de verdadera, más honda, contra el Estado burgués y contra la sociedad capitalista, sustituyó en amplios sectores de la clase obrera y de la clase media al discurso de revolución contra la monarquía que había dominado en 1930. La revolución política que dirigieron los partidos de clase media de 1931 fue seguida de los intentos de revolución social o sindical protagonizada por el anarcosindicalismo desde 1932 y por las organizaciones obreras y el partido socialista en 1934<sup>13</sup>.

---

13: JULIÁ, SANTOS, «De revolución popular a revolución obrera», *Historia Social*, 1, primavera-verano 1988, pp. 29-43. Para la persistencia de la «lógica insurreccio-

La diferencia más notable entre el proceso sociopolítico que condujo a la República con los años sesenta radica en que las nuevas clases media y obrera experimentaron transformaciones de tal magnitud en su composición interna y en su relación con las empresas y la política que acabaron por sustituir el lenguaje de revolución hablado por sus antecesores de los años diez y veinte por un nuevo lenguaje de democracia, sin verdadero arraigo hasta entonces en la sociedad española. Las nuevas clases medias de los años sesenta no estaban formadas ya mayoritariamente, como durante el primer tercio de siglo, por profesionales liberales alienados del Estado y críticos de la sociedad, herederos del viejo lenguaje de la revolución popular contra la monarquía, sino por empleados de los servicios, economistas, vendedores, técnicos, directivos de grandes empresas, empresarios. Fue así la primera clase media española que, al incorporarse profesional, orgánicamente a la empresa capitalista dejó de ver en ella el paradigma de la ilegitimidad, el enemigo a destruir: en una encuesta realizada al final de la década, el 67 por 100 de los profesionales y el 49 por 100 de los empleados de Madrid (que ascendían al 60 por 100 si eran altos empleados) opinaba que las cosas irían peor si el Estado fuera propietario de todas las industrias importantes, contra el 35 por 100 que, en ambas categorías, opinaba que irían mejor 14. Simultáneamente, al acceder muchos de sus miembros a la función pública después de demostrar sus méritos en reñidas oposiciones a los diferentes cuerpos, y al incorporarse a una administración relativamente diferenciada del gobierno, comenzó a considerarse políticamente neutral: fue la primera clase de funcionarios que pudo distinguir en España entre servicio al Estado y servicio al gobierno. Podría decirse que en los años sesenta la clase media, desde los tiempos de Larra dubitativa respecto a su verdadera posición, se incorporó definitivamente a la empresa capitalista y al Estado.

Mientras tanto, la clase obrera experimentaba una rápida transformación que la diferenciaba nítidamente del primer proletariado

---

nal» en este período, UCEALY-DA CAL, ENRIC, y TAVERA GARCÍA, SUSANNA, «Una revolución dentro de otra: la lógica insurreccional en la política española, 1924-1934», *Ayer*, 13, 1994, pp. 115-146.

<sup>14</sup> *Informe sociológico sobre la situación social de España*, Madrid, FOESSA, 1970, pp. 430-431 (levantado por la censura cuando ya estaba compuesto, paginado y hasta incluido en el índice, el capítulo de este informe dedicado a la política circular, sin embargo, de forma clandestina).

del siglo. El crecimiento económico fue suficientemente duradero y sostenido para que los jornaleros que llegaban del campo pasaran de la chabola y del realquiler a la vivienda de promoción oficial, y produjo una diversificación tan notable de la industria que sus hijos pudieron transformarse en obreros calificados. Las ciudades sufrieron un rápido proceso de segmentación espacial y social al elevarse, en sus márgenes, barrios enteros habitados por esta nueva clase obrera. De nuevo, el proceso no es enteramente original de los años sesenta, sino que se había iniciado en los años diez y veinte con el caótico crecimiento de los extrarradios de las grandes ciudades, forma de segmentación de la vieja ciudad protoindustrial. Pero aquel incipiente proceso de urbanización no llegó a culminar con la transformación de los extrarradios en barrios incorporados a la ciudad: la crisis económica de 1930 que afectó sobre todo al sector de la construcción impidió llevar adelante los proyectos de edificación de colonias de casas baratas para obreros. Podría decirse, pues, que la primera clase obrera incorporada de por vida a la ciudad y a la gran industria vio la luz en España en los años sesenta; no que no hubiera antes obreros industriales, sino que no había una clase obrera industrial de ámbito nacional, presente en todas las más importantes ciudades, trabajando en fábricas de tamaño medio y grande, de más de 100 obreros y en industrias como la química, los transformados metálicos, la construcción naval, la siderurgia, la fabricación de automóviles o electrodomésticos.

Ni esta nueva clase obrera ni las clases medias incorporadas a diversas formas de empresa capitalista recuperaron el lenguaje de la revolución que fue el propio de sus antecesores de los años veinte y treinta: ni revolución popular contra la dictadura; ni revolución obrera contra el capital; república y socialismo como proyectos o ideales políticos dejaron paso a una, primero tímida, luego más vigorosa reivindicación de la democracia. No es que se recogiese la herencia de una cultura política democrática que hubiera sido brutalmente reprimida por el franquismo pero que habría pervivido en las familias o en las pequeñas comunidades; sino que el lenguaje de la revolución popular o social del primer tercio de siglo, liquidado con el fin de la guerra, fue sustituido por un nuevo lenguaje de la democracia: más que recuperar una supuesta tradición democrática perdida o derrotada en la guerra civil, lo que aconteció fue una lenta incorporación

de nuevos valores democráticos en la segunda mitad de los años sesenta y primera de los setenta.

Esto es 10 que parece deducirse de los estudios sobre actitudes políticas realizados en la época. En 1966 se preguntó por vez primera a una muestra representativa de españoles qué sistema político preferían, si uno en el que las decisiones se tomaran por «un grupo de personas elegidas por los ciudadanos» u otro en que «una sola persona decida por nosotros». Las respuestas y su evolución en el tiempo son significativas de una situación en la que una minoría se muestra consistentemente autoritaria mientras la mayoría, que carece de cultura cívica y prefiere no responder a la pregunta en 1955, abandona paulatinamente esa actitud para incorporar valores democráticos <sup>15</sup>:

	1966	1974	1976	1982
Una sola persona que decida .....	11	18	8	7
Elegidas por los ciudadanos.....	35	60	78	81
No respuesta.....	54	22	14	12

Es curioso, pero muy coherente, que esos porcentajes coincidan con la evolución de las actividades favorables o desfavorables al ingreso de España en el Mercado Común Europeo: si en 1966 sólo se mostraba a favor del ingreso el 33 por 100 mientras un 60 por 100 no respondía a la pregunta, en 1973, los porcentajes se han más que invertido: el 73 por 100 se manifiesta favorable y sólo un 23 por 100 no contesta: en menos de diez años, los españoles habían entendido que su futuro era Europa.

	1966	1973
Desfavorable	7	5
Favorable	33	74
No respuesta	60	21

La incipiente impregnación de valores democráticos debe relacionarse, en 10 que respecta a la clase obrera, con la nueva práctica sin-

<sup>15</sup> Los datos de los cuadros siguientes son de LÓPEZ PINTOR, RAFAEL, *La opinión pública española: del franquismo a la democracia*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982, pp. 84-85, que cita diversas encuestas de la época.



dical derivada del diferente lugar que ocupaba en la sociedad. Desde los primeros años sesenta, a la edificación de las grandes barriadas obreras, a la entrada de miles de obreros en fábricas, a la incorporación en suma de la clase obrera a la sociedad industrial y capitalista, acompañó una práctica sindical que combinaba la negociación de contratos de trabajo y la resolución negociada de los llamados conflictos colectivos con la convocatoria de huelgas por medio de organizaciones clandestinas que, sin embargo, actuaban en el marco institucional del régimen franquista. La estrategia de negociación y lucha y la presencia de representantes elegidos por los obreros en los sindicatos oficiales condujo a la obtención de mejoras salariales y a la declaración de huelgas, que volvieron a ser frecuentes desde 1962, especialmente en los sectores más modernos, como el metal en todas sus ramas. Es significativo que este resurgir de la acción reivindicativa obrera no se apoyara en los dos grandes sindicatos históricos, sino que fuera protagonizado por un sindicalismo de nuevo cuño y de reciente creación, Comisiones Obreras, que aparecía fuerte en los nuevos núcleos industriales y en los sectores de mayor expansión industrial <sup>16</sup>.

Clase obrera, huelgas, sindicatos: parecería que se reproducían también las condiciones que condujeron al gran movimiento popular contra la monarquía de 1930. Pero si se lee a los analistas contemporáneos de estos movimientos huelguísticos, se tropezará continuamente con lamentos sobre lo que se llamaba bajo nivel de conciencia de clase y sobre la importancia que los intereses económicos adquirirían en el despertar de la oposición obrera: el principal factor desencadenante de las huelgas era la obtención de mejoras salariales <sup>17</sup>. El sindicato y la huelga comenzaron a ser predominantemente instrumentos de reivindicación laboral, y no -como en los años veinte y

---

<sup>16</sup> La importancia de las transformaciones de la clase obrera en el crecimiento de un nuevo movimiento obrero que implicaba una ruptura de continuidad con el pasado ha sido analizado para la Gran Barcelona por BALFOUH, SEBASTIAN, *Uniclarship, workers and the city. Labour in Greater Barcelona since 1939*, Oxford, 1989, pp. 41-61.

<sup>17</sup> GARCÍA, ENRIQUE, «El movimiento obrero en Madrid: los metalúrgicos», en *Cuadernos de Huedo Ibérico*, 3, octubre-noviembre 1965, pp. 97-102, para la débil conciencia de clase e informes policiales para la «manifiesta impaciencia de los productores en general para conseguir niveles de vida superiores» que atribuye a «contagio de los productores españoles en el extranjero», citados por YSÁS, PERE. «Huelga laboral y huelga política. España, 1939-75», *Ayer*, 4, 1991, pp. 202-203.

treinta- vanguardia política de la clase obrera y antesala de la insurrección o sujeto de la revolución. El sustancial incremento en el número de huelgas, de huelguistas y de horas de trabajo perdidas nunca desembocó, a pesar de los esfuerzos encaminados en ese sentido, en una huelga general política que derrocaria al régimen de Franco.

Ahora bien, lo que probablemente escapara a esos desalentados observadores de la época fue que al defender reivindicaciones de carácter laboral en el marco de una dictadura, los obreros acumulaban una gran experiencia en la negociación de contratos de trabajo que necesariamente conducía al desarrollo, si no de una conciencia revolucionaria, sí de valores democráticos, pues era condición de una defensa eficaz de sus intereses laborales disponer de sindicatos libres. De modo que la solidaridad con otros trabajadores en huelga, la libertad sindical y, de rechazo, la democracia política, comenzaron a incorporarse a las plataformas reivindicativas: se iba a la huelga por motivos económicos, pero al defender esos intereses se reivindicaba también la libertad de organizarse para defenderlos o se mostraba solidaridad con quienes se encontraban ya en huelga defendiéndolos <sup>18</sup>. Esa simple realidad llenó de otro contenido político la reivindicación obrera: el sindicato dejó de percibirse como agente de la revolución social mientras la misma revolución como objetivo político a largo plazo, siempre presente en el sindicalismo español de la preguerra, dejó paso a la reivindicación de «un marco de libertades democráticas» <sup>19</sup>. Nunca antes el sindicalismo se había relacionado con la política en España bajo esta óptica.

Si el horizonte político de la clase obrera movilizada se dirigía a la obtención de unas libertades que le permitieran organizarse sindicalmente para la defensa de sus intereses, el de la clase media no pasó del de una democracia compatible con el orden. Sin duda, era entre profesionales, cuadros medios y directivos de empresa donde más extendidos se encontraban los valores democráticos y donde más mayoritaria aparecía la aptitud favorable al ingreso de España en el Mercado Común Europeo o a la existencia de partidos. Pero, si se ex-

---

<sup>18</sup> Ver el análisis de las huelgas de los años 1966 y 1967 realizado por MAHAVALL, JOSÉ MAHIA, en *El desarrollo económico y la clase obrera*, Barcelona, 1970, pp. 130 y ss.

<sup>19</sup> PÉREZ DÍAZ, VÍCTOR, *Clase obrera, partidos y sindicatos*, Madrid, 1979, pp. 19-22.

## *Orígenes sociales de la democracia en España*

ceptúan los estudiantes universitarios -**que** convirtieron a la Universidad desde mediados los años sesenta en una institución de oposición al régimen-, la ascendente clase media española no se movilizó de forma masiva contra el franquismo, como sí lo había hecho contra la monarquía alfonsina. Se puede decir que la represión no bajó nunca la guardia y que en un régimen de estricta vigilancia policial pretender el éxito de una huelga general política o una movilización masiva contra la dictadura no pasaba de ser una quimera. Pero si los primeros estudios sociológicos no engañan, podrá aventurarse una razón complementaria: la mayoría de los españoles situaba, de forma consistente aunque ligeramente decreciente, la paz y de orden como valores políticos prioritarios, muy por encima de la libertad y la democracia; se era demócrata siempre que serlo no implicara un desorden generalizado. Si se toman los valores de justicia, libertad y democracia como típicamente liberales, y los de estabilidad, orden y paz como conservadores, entonces resuharía que los españoles fueron impregnándose paulatinamente de valores liberales -antes de justicia que de democracia o libertad- sobre un fondo de consistente conservadurismo.

	1966		1975		1976	
Justicia .....	14		23		27	
Libertad .....	3		5		7	
Democracia .....	3	20	5	33	6	<b>40</b>
Estabilidad .....	2		4		3	
()rden .....	9		7		5	
Paz .....	57	68	45	56	36	<b>44</b>

No quiere esto decir que, con el desarrollo económico y la paz social, el régimen franquista haya conquistado una legitimidad de la que careció en su origen y que los españoles se haya identificado positiva, activamente con él. Lo que revela esa evolución de las actitudes políticas es que la emergencia de valores democráticos se produjo en el marco de una larga dictadura establecida como resultado de una guerra civil, lo que evidentemente definió con esa peculiar predilección por la paz y el orden el proceso de incorporación de los nuevos valores políticos. La percepción mayoritaria aparece cargada, pues, de un componente cívico: puesto que en una sociedad que cambiaba a ojos vistas en la dirección de los países europeos, el régimen

no podría perdurar más allá de la vida de Franco, ¿para qué movilizarse por su derrocamiento si hacerlo implicaba un desorden radical y el riesgo de lo desconocido? La adaptación social al régimen de Franco, implícita en esta actitud, le aseguró hasta sus dos últimos años niveles de conflictividad muy inferiores a los que hubo de soportar la monarquía de Alfonso XIII y la República y configuró una forma muy extendida de cinismo político, que impregnó esa lenta asimilación de valores democráticos: la democracia estaba bien con tal de que no se arriesgara el orden.

y aquí radica una de las razones de que ni los proyectos de continuismo del franquismo, ni los de ruptura con él, consiguieran la adhesión activa de los españoles. En los últimos años del régimen se formularon diversas estrategias para el futuro que o bien pretendían continuarlo sobre una base ligeramente modificada por una apertura controlada y muy limitada o bien proyectaban una ruptura radical que abriera el camino hacia conquistas superiores. Los continuistas no contaron con que si los españoles querían paz y orden, también se inclinaban por Europa y el multipartidismo; los rupturistas no percibieron que si querían libertad y democracia, mantenían entre sus opciones preferidas la paz y el orden.

Se produjo así una evidente distancia entre la clase política del franquismo y los dirigentes de la oposición, por una parte, y la mayoría de la población que asimiló los valores democráticos como elementos de una cultura política caracterizada hasta entonces por el predominio de valores conservadores. Los primeros confundieron la adaptación pasiva a la dictadura con el apoyo activo al régimen en razón de su eficacia económica. Los continuistas pretendieron que el régimen de Franco había conquistado la legitimidad gracias a 10 que se denominó franquismo sociológico, la aparición de una numerosa clase media y trabajadora que había accedido de forma masiva a los bienes de consumo duradero. Basados en tal presunción, y disponiendo del control de un ampliado aparato de Estado, de una numerosa burocracia y de la fidelidad de las fuerzas armadas y de seguridad idearon una operación por la que el mismo régimen, concediendo una limitada apertura política, podría mantenerse indefinidamente sobre sus bases tradicionales: habían perdido de vista que si la mayoría de los españoles no se había manifestado de forma activa por la democracia, sí habían mostrado su preferencia por un sistema político en el que las decisiones se tomaran por «un grupo de personas elegidas

por los ciudadanos» y no «por una sola persona que decida por nosotros».

Pero en esa peculiar asimilación de los valores democráticos radica también la razón del reiterado fracaso de las llamadas a una huelga general de contenido político que acabara con la dictadura, desde la primera convocatoria de huelga nacional pacífica en junio de 1958 hasta la última de huelga general de noviembre de 1976. Los rupturistas no renunciaron a un proyecto político que implicaba el derrocamiento del dictador en el marco de una acción de masas dirigida por una amplia coalición de fuerzas democráticas que nombraría un gobierno provisional. La oposición de izquierda percibía la caída de la dictadura y la batalla final por la democracia de acuerdo con un guión que repetía en su letra y en sus protagonistas lo ocurrido en 1930: un amplio movimiento popular que desembocaría en una huelga general administrada políticamente por un gobierno provisional en el que la oposición tendría el papel dirigente y sería la encargada de instaurar una democracia avanzada como vía a una futura transición al socialismo.

Este era el marco previsto de la instauración de la democracia como ruptura. No es posible entrar aquí en el análisis de este proyecto, en lo que pudo tener de puramente especulativo, en su pretensión de repetir páginas de la historia pasada. La realidad fue que mientras la oposición creaba plataformas democráticas, muy pocos españoles corrieron a engrosar las filas de los partidos y sindicatos que deberían dirigir esa ruptura. Los socialistas no contaban en 1975 con más de 5.000 afiliados en el interior y en el exterior, y los comunistas, mejor organizados y más activos en la oposición a la dictadura, no debían de llegar a los 15.000. Sin duda, a medida que se acercaba el fin del dictador, las encuestas anotaban el lento crecimiento de los porcentajes de quienes preferían la democracia y la libertad al orden y la seguridad, pero esa preferencia, que no llegó a ser mayoritaria hasta la muerte de Franco, nunca fue suficiente para engrosar las filas de los partidos de oposición ni para secundar las llamadas a la huelga general. La instauración de la democracia nunca sería el resultado de una irresistible movilización popular.

El hecho de que no se produjera nunca un movimiento popular por la democracia de la envergadura del que se produjo en 1930 por la República y de que la llamada a una huelga general, convocada por última vez en noviembre de 1976, no encontrara nunca un ma-

sivo apoyo popular, indica bien que entre la mayoría de las nuevas clases media y obrera la voz democracia no tenía el mismo valor, ni ocupaba el mismo lugar, que entre los dirigentes de los sindicatos obreros y de los partidos de izquierda, cuya fuerza para impedir una política continuista no era suficiente, sin embargo, para imponer una política rupturista<sup>20</sup>. De hecho, la oposición de izquierda se desplazó de su política de ruptura a otra de reforma pactada cuando la presión obrera, que había llegado a un punto culminante en los primeros meses de 1976, no encontró en el conjunto de la población eco suficiente para forzar una salida al estilo de 1931, con un gobierno provisional que dirigiera el proceso de transición. Intentar una explicación de esa distancia entre la estrategia rupturista y lo que la mayoría de la gente estaba dispuesta a hacer para instaurar una democracia ayuda a entender la forma en que la asimilación de una cultura política democrática impregnada de valores conservadores determinó el concreto proceso de transición.

Pues, en efecto, la reivindicación de la democracia por los dirigentes de los grupos y partidos de oposición adoptó a menudo un valor instrumental, como ariete de lucha contra la dictadura, en un primer momento; como vía hacia lo que se llamaba otro modelo de sociedad, después. Pocas veces la democracia se reivindicó, por una generación de líderes políticos y sindicales formados en el marxismo, como un valor en sí: la democracia era la nueva forma política del dominio burgués reconstruido sobre bases modernas, industriales y neocapitalistas. Aun así, era preciso luchar por ella porque ampliar el espacio de la oposición al régimen exigía enarbolar valores políticos aceptados por amplios sectores sociales y porque, frente a la dictadura, la reivindicación de libertad y la defensa de los derechos humanos era la vía para reconstruir un frente interclasista en el que se encontraran desde el obrero consciente hasta el burgués liberal pasando por los intelectuales radicalizados de clase media: una especie de frentepopulismo que desembocaría en una democracia de tipo superior o avanzado. Eran los tiempos en los que toda la oposición se presentaba como demócrata, aunque no faltaran los que se apresuraban a aclarar que la suya no sería una democracia formal burgue-

---

<sup>20</sup> La forma en que se efectuó la transición dejó «disappointed» a muchos dirigentes de Comisiones Obreras, especialmente en Barcelona, según M. FISHMAN, ROBERT, *Working-class organization and the return of democracy in Spain*, Ithaca, 1990, p.146.

sía, sino la profunda, la social o la que conduciría al socialismo. Todavía en marzo de 1979, votar a la izquierda se presentaba en la revista *Triunfo* como servidumbre temporal porque era preciso defender y consolidar la democracia hasta «que más tarde tengamos la ocasión de proyectarnos de otra forma»<sup>21</sup>.

En todo caso, el hecho de que la movilización contra la dictadura no se expresara en términos de revolución, sino en términos de democracia (aunque fuera considerada como vía hacia superiores conquistas) pone de manifiesto el profundo cambio en la cultura política experimentado por amplios sectores sociales en relación con el primer tercio de siglo. Entonces, la democracia no pasaba de ser un valor reivindicado por una minoría social y hasta esa minoría pensaba que no podría establecerse, sino como fruto de una revolución. La democracia, por así decir, venía después de la revolución. Los dirigentes republicanos que habían reivindicado en su primera madurez la democracia como valor político supremo, situaron desde 1925 por encima de ella la revolución. Y hasta alguien tan expresamente democrata como Azaña defendió en 1934 que salvaguardar la revolución de 1931 era antes que atenerse a procedimientos democráticos. Que ahora, en los años sesenta y setenta, hasta los dirigentes que situaban la revolución en su horizonte político la mantuvieran en un segundo plano —o no hablaran de ella— y pusieran todo el énfasis en la democracia indica bien el cambio profundo de mentalidad entre esas dos generaciones.

Esta actitud favorable a la democracia, pero temerosa de una quiebra de la paz social, a la vez que puede explicar el fracaso de las políticas continuista y rupturista ayuda a entender que la dirección política del proceso de transición recayera en el sector de las fuerzas del régimen de Franco que asimiló la reivindicación de democracia y libertad a la vez que aseguró el proceso de su instauración dentro de la legalidad vigente y sin quebranto del orden social y político. Y es esa misma actitud la que explica que, desde la misma instauración de la democracia, los españoles hayan preferido invariablemente la opción política que mejor garantizaba a sus ojos la democracia y el orden. Desde las elecciones de 1977, el partido que ha conseguido la victoria es el que era percibido por los electores como más cercano a la posición de centro" en la que se autoubicaba la mayoría. Es signi-

---

<sup>21</sup> «El voto a la izquierda», *Triunfo*, 3 de marzo de 1979.

ficativo a este respecto que cuando los dirigentes socialistas, y muy especialmente Felipe González, apostaron por convertir a un partido de oposición en partido de gobierno lo desplazaran significativamente hacia el centro y lo presentarán como «referente de tranquilidad» para «todos los españoles»<sup>22</sup>.

Desde entonces, la consistente legitimidad de que goza la democracia entre los españoles se acompaña de un notable desinterés por la política: en tal aparente contradicción parece discurrir nuestra vida política. Las razones que se han aducido para explicarla son múltiples: la permanencia de un legado franquista que, más que inculcar valores autoritarios, habría dejado como secuela un interés prioritario por lo privado, por el consumo y el gasto, por los valores materiales frente a los que miran más a la calidad de la vida social y a la participación en tareas colectivas, y una dejación al Estado de todo lo que afecte a los intereses colectivos. De hecho, un elevado porcentaje de españoles tendía, en los primeros años ochenta, a transferir al Estado la solución de todos los problemas sociales, y al mismo tiempo mostraba una persistente desconfianza ante los políticos y un claro desinterés en la política<sup>23</sup>.

Sería posible otra explicación: que el 80 por 100 de los españoles prefieran la democracia a cualquier otra forma de gobierno y que un porcentaje sensiblemente igual diga estar poco o nada interesado en política no demostraría más que los españoles repiten exactamente las respuestas a esas preguntas que ofrecen los europeos. Legitimidad de la democracia, satisfacción relativa por su funcionamiento, ubicación en el centro político, preferencia por las reformas antes que por la revolución, desinterés por la política o, en general, por los asuntos de gobierno es la mezcla de valores que constituyen la cultura política de las democracias de nuestro tiempo. No es muy excitante, pero eso es todo lo que hay y en eso, como en tantas otras cosas, España también dejó de ser diferente desde los años sesenta.

<sup>22</sup> Entrevista de Felipe González por Juan Luis Cebrían, *El País*, 14 de junio de 1979. JULIÁ, SANTOS, «The ideological conversion of the leaders of the PSOE, 1976-1979», en LANNON, F., y PRESTON, P., *Elites and power in Twentieth Century Spain*, Oxford, 1990, pp. 268-285.

<sup>23</sup> BENEDICTO, JORGE, «Sistemas de valores y pautas de cultura política predominantes en la sociedad española (1876-1985)», en TEZANOS, J. F.; COTALERO, R., y DE BLAS, A. (eds.), *La transición democrática española*, Madrid, 1989, pp. 645-678.